



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud en el Real Sitio de San Ildefonso.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 481.

Se piden de manifiesto los males á que se exponen los habitantes del país por emigrar á las repúblicas americanas.

Administración.—Negociado.

Entre las calamidades que la falta de cosechas y la consiguiente miseria hace pesar sobre Galicia puede mirarse como una de las más importantes la emigración siémpre creciente de los naturales del país á las provincias y regiones ajenas, en que presumen acumular riquezas y hallar un bienestar que con repelición les niega su propio suelo. Conozco toda la fuerza que en imaginación se no alccionan por la experiencia, debe hacer la indigencia primero, y los embaucamientos despues, de los que sin corazon y sin entrañas se convierten en reclutadores de sus hermanos halagándolos con promesas mentidas; mas comprendan estos que despues de servirse de ellos como objeto de especulacion, son arrojados á playas inhóspitas en que les espera la abyección y la muerte. Por muy sobrecargado que parezca este relato, no lo es tanto que sobrepuse á la realidad, y como prueba de ello se inserta á continuación un articulo publicado en el periódico político *Diario Español*.

que lo tomó á su vez de otro que con el título de el *Irurac-bat* vé la luz en Bilbao, y en que se retrata fielmente la suerte que aguarda á los infelices gallegos en Montevideo, en Buenos Aires y en las demas repúblicas americanas que un dia pertenecieron á España. Tantas y tan inhumanas crueldades han llamado la atención del Gobierno de S. M. y de las Autoridades superiores de las provincias que no han podido menos de adoptar las medidas convenientes para hacer cesar en lo posible el horrible tráfico de que son víctimas, principalmente, nuestros paisanos. Pero como el mejor medio de combatir esta nueva plaga, no son solo las medidas legales de represión, sino el que la opinion se esclarezca poniéndola de manifiesto toda la verdad, he resuelto hacer un llamamiento á todas las personas ilustradas de la provincia, empujando su bien entendido patriotismo y sus sentimientos humanitarios, para que enterados de esta circular y de los documentos que á continuación de ella se insertan, procuren darla la mayor notoriedad y hacer comprender á la multitud ciega por la ignorancia el cúmulo de sufrimientos á que se expone el alma en que, prestando oídos á las promesas de una avaricia sordida, abandone el país natal. Tengan entendido los que á pesar de este aviso se arriesguen á emprender una navegacion en cuyo término les espera la muerte, que al arribar á Méjico, al Perú y á Montevideo, se encontrarán aislados en un país extraño en que el nombre español es poco considerado, y en que los que no sucumban al abandono y á la influencia perniciosa del clima, serán destinados á durísimos trabajos, vendidos como esclavos ó reclutados al servicio de una de las diferentes banderías que destrozan aquellos infortunados países desde que se emanciparon de la Metrópoli.

El mal de que todos los hombres honrados de España se lamentan no es nuevo por desgracia, y así lo acreditan las disposiciones dictadas por el Gobierno de S. M., en ocasiones distintas, para minorar sus efectos; pero el trascurso de los años en vez de hacerlo cesar, lo acrecienta ayudado de la escasez y de la esterilidad de las cosechas. No basta, pues, que la accion tutelar del Gobierno haya tratado de regularizar las emigraciones y haya concedido garantías á los que se resuelven á emprenderlas; éstas se renuncian por los interesados, ó se burlan por los que no tienen reparo en conculcar preceptos mas sagrados; y por consiguiente, es necesario que cada uno conozca no solo los derechos que la ley le concede, sino el resultado que le espera cuando se balle fuera del alcance del pabellon español.

Ilustrar la opinion es, repito, el mejor medio de combatir los funestos hechos que se revelan; y con este fin los señores Alcaldes de la provincia dispondrán que los Pedáneos de todas las parroquias, y en su defecto cualquiera persona apta, den lectura de esta circular y documentos siguientes á la salida de la misa capitular en el primer dia festivo, fijando despues el Boletín por una semana entera en la puerta de la iglesia parroquial, y poniéndose de acuerdo con los Sres. Curas respectivos para que éstos por su parte empleen la persuasion y todos los medios morales que su elevado carácter y sagrado ministerio les concede.

Los señores Alcaldes me darán aviso sin falta alguna de quedar ejecutado lo que se les previene, así como serán estrechamente responsables si dejan de dar me noticia instantánea, caso de que pudiera presentarse en sus distritos cualquier agente ó reclutador que promueva la emigracion.

Orense agosto 18 de 1859.—El Gobernador, *Hermenegildo Guillan*.

DOCUMENTOS QUE SE CITAN.

En el núm. 2192 del periódico político *Diario Español* que se publica en Madrid y remánolo de otro de las Provincias Vascongadas titulado el *Irurac-bat*, se lee lo siguiente:

—To los los dias se dirigen á bandadas á San Sebastian, Pasajes ó Bayona, jóvenes alucinados que van á embarcarse en los buques establecidos para las cárceles de Montevideo y Buenos Aires, tras un ilusorio porvenir, en busca de un filon de oro que solo reside en su empuñecido y engañado cerebro. El vapor *Union* en su último viaje de Bilbao á Bayona, ha conducido á este último punto 30 de estos desgraciados pasajeros, los cuales van á embarcarse en el buque *Juanita*, que se está desparhando para hacer rumbo á Montevideo.

La suerte de los Españoles que pasan á aquel país no puede ser mas horrible.

El tráfico de carne humana, establecido de Galicia á las orillas del Plata, empezó en tiempo del famoso dictador de aquel país Rosas, cuando algunos magnates, para congraciarse con el tirano, hacian cargar buques de gallegos á fin de que, el restaurador tuviese á un tiempo soldados y peones para empedrar las calles; hoy, la suerte de nuestros infelices compatriotas en nada ha mejorado.

Los especuladores de Vigo, Carril y Coruña, mandan agentes por las aldeas de Galicia, embaucando á los padres que tienen hijos, ya asustados con la quinta, ya huyendo de la falta de trabajo, ó ya en fin, recordándoles algunos que en otros tiempos hicieron fortuna en América en pocos años, y les inducen á que embarquen sus hijos en la *Coruñesa*, *Centicela*, *Frateruda*, *Aquiles*, *Luna* y otros buques, que son las mas viejas y desmanteladas que tiene la España. Los sencillos pescadores y labradores de aquellas aldeas, alucinados por los charlatanes pagados por los armadores, consienten en firmar el contrato que el charlatan trae ya extendido; el padre consiente en que su hijo se embarque con la conlicion que el capitán cobrará su pasaje en Montevideo ó Buenos Aires, y que si no lo cobra, el inocente padre se compromete á pagarlo con gastos, á cuyo fin hipoteca su casita, su campo ó su lancha de pescar.

Los pasajeros se dirigen al puerto de embarque; pero como la codicia de los armadores es mas grande que la capacidad de sus viejos y estropeados buques (algunos que ninguna compañía habria asegurado), ademas de los pasajeros que a la vista de la autoridad se embarcan, mandan 50 mas en lanchas á la boca de la ria,

que está algunas leguas distante, y allí clandestinamente abarrotan sus buques de carne humana. Además, llevando carne viva á granel, se pueden ocultar las bajas. Si conviene al capitán, puede ocultar las muertes que han ocurrido á bordo durante el viaje. Llegan los infelices á Buenos Aires, enfermos unos y convalecientes otros. Si el capitán es como el de la «Fraternidad» que solo tenga figura de hombre y nombre de cristiano, á los pasajeros que no pueden vender, los arroja encima del muelle, donde se los encontrará al anochecer llorando sin haber comido nada en todo el día. El capitán de la «Fraternidad» que así abandonó á catorce niños de doce años en el muelle de Buenos Aires, torció con sus papeles en regla, para que los padres de aquellos niños abandonados vieran su casita, su campo ó su lancha, para pagar al armador el pasaje que sus hijos no habían pagado!

Los infelices gallegos sin oficio, no pueden ser sino changadores, criados, serenos y soldados. Changadores, no encuentran donde ganar el equivalente de 12 reales vn. diarios, que en aquel país no basta para vivir. Los demás pasan la vida mas miserable; pero la miseria sería lo de menos; lo que sentimos es la deshonra que les cabe. Esos infelices niños de doce años que llegan á Buenos Aires y Montevideo, son entregados á ciertos agentes de los capitanes y consignatarios, y estos agentes hacen su negocio abonando los pasajes. Para que en España sepan lo que paso, diremos que hay pocas prostitutas en Buenos Aires, que no tengan muchachos gallegos por criados. Hace poco que ocho muchachos gallegos de doce á quince años, fueron vendidos del modo siguiente. Durante tres años servirán, de valdes; al cabo de tres años se les señalará sueldo, y de aquel sueldo se cobrará el dueño los pasajes y gastos. No sabemos si los destinarán á vender billetes de la lotería ó á encender faroles, ó si los alquilarán de criados á las casas de prostitucion. En aquel país de libertad y de industria, puede dárseles el destino que parezca, y cuando sean hombres los muchachos, si quieren escaparse, el contratista los hará poner presos.

En las autoridades del país no se busca apoyo; porque prevalece la idea equivocada de que conviene al país que haya sirvientes baratos. Creen los publicistas de Buenos Aires que para prosperar el país no se necesita que las mujeres sepan lavar, planchar y cocinar para su familia, sino que puedan tener criados y criadas con poco salario. Y como por desgracia todo el mundo tiene criados y criadas, los pocos del país y de color se colocan en casas de familias decentes, mientras que los infelices jóvenes gallegos han de colocarse por cuenta de los contratistas en los lupanares. Así es que, llenos de miseria, han de abordar el hospital. El de Montevideo del año pasado presenta un estado del que resulta que los españoles entrados en el hospital de Montevideo lo fueron en número espantosamente superior al de los de otras naciones.

Real orden acordando varias disposiciones para regularizar la emigración á América de los súbditos españoles.

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de un expediente instruido en este Ministerio á consecuencia de las gestiones promovidas por varias Autoridades y particulares con objeto de que cese la prohibición que en virtud de Reales órdenes vigentes está pesando sobre los habitantes de las Islas Canarias para emigrar á las Repúblicas de la América del Sur en su vista, y considerando que al dictar el Gobierno dicha prohibición tuvo presente el mal trato que recibían los emigrados españoles, y los riesgos, molestias y vejaciones á que se veían ex-

puestos á causa de las guerras intestinas que azolaban aquellos países:

Considerando que desde la época en que se dictaron las mencionadas disposiciones han variado las circunstancias, cesando en alguna de dichas Repúblicas el estado de agitación en que se encontraban, y habiéndose establecido en muchas de ellas agentes diplomáticos y representantes del Gobierno Español, que en todo caso protegerán los intereses, los derechos y las personas de los súbditos de S. M. Católica:

Considerando por lo mismo que no sería ya justo ni equitativo mantener subsistente una prohibición absoluta que impide á los naturales de Canarias buscar con seguridad en otros países el sustento que no encuentran en su patria, y dar conveniente salida al exceso de población de dichas islas, exceso que, lejos de ser un elemento de prosperidad, sirve de rémora á sus adelantos:

Considerando que si bien los intereses generales y particulares de las Islas Canarias reclaman como de necesidad urgente que cese la prohibición, aconsejan al propio tiempo que esta medida se adopte con la prudencia y circunspección indispensables, á fin de evitar los graves inconvenientes de una emigración repentina, simultánea y demasiado numerosa:

Considerando por último que uno de los mas sagrados deberes del Gobierno es impedir los abusos á que suele dar lugar la codicia de los especuladores que, llevados de sordido interés, conducen á veces á los que emigran hacinados en estrecho espacio, y sin las condiciones sanitarias que el decoro, la moral y hasta la humanidad misma reclaman;

S. M., después de oído el dictamen del Consejo Real, se ha servido mandar que cese la prohibición de emigrar á América que pesa hoy sobre los habitantes de las Islas Canarias, y que para los embarques que se verifiquen por consecuencia de esta soberana disposición se observen las reglas y prevenciones siguientes:

Primera. Que la emigración se permita únicamente para las colonias españolas y para los estados de la América del Sur y de Méjico, donde existan representantes ó delegados del Gobierno de S. M. Católica, que puedan prestar á los emigrados la protección necesaria.

Segunda. Que para expedir pasaporte á los que pretenden emigrar, deben estos acreditar previamente ante la Autoridad civil:

1.º Que emprenden el viaje libre y espontáneamente.

2.º Que tienen el permiso de sus padres, tutores ó maridos, los que lo necesitan por razon de su edad, estado ó sexo.

3.º Que no se hallan encausados criminalmente ni tienen impedimento legal para ausentarse.

4.º Si son varones de 18 á 25 años cumplidos y quieren pasar á países extranjeros, que han consignado en depósito, como garantía de su responsabilidad personal para el servicio de las armas 6,000 rs. vn., ó otorgado escritura de fianza suficiente, con arreglo á lo dispuesto en el art. 117 del proyecto de ley de reemplazos vigente.

Tercera. Que á los que después de acreditar los requisitos anteriores juzgue y declare el Subgobernador del distrito notoriamente pobres, mediante información ó expediente gubernativo que se instruya al efecto, se les expidan los pasaportes y licencias gratis.

Cuarta. Que no pueda contratarse el embarque ni partir ninguna expedición de emigrados sin que preceda Real autorización especial para cada caso, expedido por este Ministerio, en la que exprese el número de individuos de que ha de constar aquella, con el objeto de que la emigración no se haga repentina ó simultáneamente, sino segun las necesidades,

poblaciones y circunstancias de cada localidad.

Quinta. Que para los efectos y resolución indicados en el artículo anterior den curso los Subgobernadores á las solicitudes de autorización que se les presenten, informando, al remitirlas á este Ministerio, acerca de la conveniencia ó inconveniencia de acceder á ellas en todo ó en parte.

Sexta. Que concedida dicha autorización, no sea válido ningún contrato para trasportar españoles á los Estados hispano-americanos que no se someta á la aprobación del Subgobernador del distrito.

Sétima. Que no se permita en ningún buque el embarque de mayor número de pasajeros que los que pueda trasportar en proporción de su capacidad y toneladas, después de la carga y viveres, segun lo que disponen sobre el particular las Ordenanzas é Instrucciones de Marina.

Octava. Que en los contratos con los pasajeros se exprese la cantidad ó calidad de los alimentos y del agua que los emigrados hayan de recibir á bordo durante el viaje, y que antes de la salida de los buques se cerciore la Autoridad de que llevan los acopios de agua y provisiones suficientes para cumplir esta condicion.

Novena. Que en las expediciones de alguna consideración se procure que vayan un médico-cirujano, un capellan y el correspondiente botiquin para los pasajeros que enfermen en el tránsito, no debiendo dispensarse de este último requisito á ningún buque, sean cualesquiera su porte y el número de emigrados que lleve á bordo.

Décima. Que se estipulen y consignen en los contratos con los pasajeros, así el precio del transporte, que deberá ser proporcionado á las estancias, como el plazo dentro del cual hayan de satisfacer los emigrados, no pudiendo ser este menor de dos años, y quedando sin embargo á su arbitrio el acortarlo.

Undécima. Que se expresen igualmente en las escrituras de contratos las garantías que dieren los emigrados para el pago del pasaje.

Duodécima. Que llegados los pasajeros á su destino, queden en completa libertad para dedicarse á la ocupación ó trabajo que mas les convenga, sometidos á las leyes y reglamentos vigentes en el país adonde se dirijan respecto á los colonos extranjeros.

Décimatercia. Que los contratos se extiendan por triplicado, quedando un ejemplar en poder del contratista, otro en el del colono, y el tercero en el del Subgobernador respectivo.

Décimacuarta. Que como garantía del cumplimiento exacto de dichos contratos, se obligue á los dueños ó armadores de las embarcaciones expedicionarias á dejar anticipadamente en depósito 520 rs. en metálico por cada uno de los pasajeros que contraten, ó una fianza en fianzas por lo menos de doble valor. Estas fianzas responderán, no solo de los excesos y abusos que puedan cometer los dueños y capitanes de los buques conductores, sino tambien de que los emigrados son conducidos al punto de su destino y no á otros; y por último, es la voluntad de S. M. que estas disposiciones se observen tambien en todos los puertos del litoral de la Peninsula en que se verifiquen expediciones de españoles con iguales circunstancias que las expresadas en esta Real orden, correspondiendo en tal caso al Gobernador de la respectiva provincia la inspección que en ella se comete á los Subgobernadores de distrito de las islas Canarias.

De Real orden lordigo á V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de setiembre de 1855.—Gañá.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Real orden, estableciendo las reglas á que deben sujetarse las expediciones de emigrados para la América del Sud.

Diversas reclamaciones de los Representantes del Gobierno de S. M. en los Estados de la América del Sur han hecho conocer que no se exige por algunas autoridades el cumplimiento exacto de la Real orden de 16 de setiembre de 1855, dirigida á regular la manera con que han de tener lugar las expediciones de emigrados para aquellos países, y deseosa la Reina (Q. D. G.) de que todas sus disposiciones sean puntualmente observadas, se ha servido mandar:

1.º Que los Gobernadores, por si mismos y bajo su responsabilidad, visiten todo buque expedicionario en los puntos de su residencia, y que donde no la tuvieren, encomienden este servicio á un Comisionado especial ó autoridad de su confianza.

2.º Que remitan siempre á este Ministerio certificación duplicada de la visita, comprensiva de todas las formalidades y circunstancias que marra la citada Real orden de 16 de setiembre.

3.º Que remitan igualmente dos copias certificadas de cada ejemplar de cada contrato, de los que deben quedar en el Gobierno de provincia, á fin de enviar los expresados documentos al Representante del Gobierno en el puerto adonde se dirija la expedición, para que manifieste si por el Capitán del buque se ha atendido á los pasajeros cual corresponde, y tambien si el que los contrató ha cumplido con esta orden y con la de 16 de setiembre.

4.º Que la misma quede derogada en la parte de su regla 14, relativa á las fianzas en fianzas, las cuales únicamente deberán prestarse en metálico.

5.º Que la garantía de 520 rs. por cada contrato se consigne en la Caja general de Depósitos ó en otros establecimientos análogos de las provincias marítimas, á elección de los Gobernadores.

6.º Que la citada cantidad de 520 reales quede afecta á la responsabilidad que pueda resultar contra el dueño ó armador del buque en virtud de lo que expanga el delegado del Gobierno en el punto adonde vaya destinado ó desembarque la expedición.

7.º Que además de la responsabilidad pecuniaria incurran tambien los dueños ó armadores en la de prohibirseles contratar nuevas expediciones cuando hayan faltado en otras á las prescripciones legales, dándose aviso al efecto al Ministerio de Marina y autoridades civiles.

8.º Que estas reglas se observen asimismo para las expediciones que puedan dirigirse desde cualquier punto del territorio español á las provincias de América y Asia.

9.º Que se devuelva á los imponentes el depósito, si de lo informado aparece que se han ajustado exactamente á todas las disposiciones prescritas en esta orden y en la de 16 de setiembre de 1855.

De la de S. M. lo digo á V. S. para su conocimiento, y en la inteligencia de que el Gobierno le exigirá á su vez la responsabilidad que corresponda por las faltas que hubiere en el cumplimiento de lo que se manda.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de setiembre de 1856.—Rios.—Señor Gobernador de la provincia de...

Real orden fijando las reglas á que han de sujetarse las expediciones de colonos ó emigrados para Cuba y Puerto Rico.

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en este Ministerio en vista de una exposicion que elevaron á S. M. los navieros y armadores de la matrícula de Santa Cruz de Tenerife, haciendo presente las ventajas que en su juicio ofrece la emigración de colonos españoles á nuestras Antillas sobre la que

se autoriza para las repúblicas Hispano-Americanas, y solicitando, en su consecuencia, que se reformen en este sentido las Reales órdenes de 16 de setiembre de 1853 y 7 de igual mes de 1856, que establecen indistintamente para ambas emigraciones las mismas reglas y garantías; y considerando:

1.º Que es conveniente distinguir la emigración á nuestras posesiones de Ultramar de la que se dirige á las Repúblicas Hispano-Americanas, á fin de dictar una solución acertada en este punto.

2.º Que cuando los colonos ó emigrados van contratados por individuos ó empresarios particulares, sea cualquiera el punto á donde se dirijan, incumbe al Gobierno examinar las condiciones bajo las cuales se celebren los contratos, y resolver los expedientes en solicitud de autorización para los embarques con la circunspección y parsimonia que exige un asunto de tanta gravedad y tan endencia.

3.º Que cuando los viajeros van de sobrecargo á las islas de Cuba y Puerto Rico en virtud de los contratos para el pago del pasaje con los armadores ó dueños de los buques, y sin condiciones que les obliguen á prestar servicios personales, no es necesario que se impida de S. M. la Real licencia de embarque, el cual puede autorizarse con mayor ventaja para el comercio por los Gobernadores de las provincias, después de haber exigido cuidadosamente la observancia de cuanto prescriben las Reales órdenes vigentes.

4.º Que en las expediciones que salgan con pasajeros ó emigrados para cualquiera punto de América, bien sean conducidas por contrata ó bien vayan de sobrecargo, es indispensable que los armadores de buques presten una garantía eficaz, que pueda hacer efectiva su responsabilidad por la falta de cumplimiento de los contratos de embarque.

Y 5.º Que si bien es conveniente que los Gobernadores de las provincias concedan los permisos de embarque cuando solo se trata de pasajeros que van de sobrecargo á nuestras Antillas, no por eso debe entenderse que están exentos de dar cuenta al Gobierno de estas expediciones y de remitir á este Ministerio los documentos á que se refieren los artículos 2.º y 3.º de la Real orden de 7 de setiembre de 1856; la Reina (Q. D. G.) después de haber oído el parecer de las Secciones de Gobernación y Fomento y de Ultramar del Consejo Real, ha tenido á bien resolver:

1.º Que quede en toda su fuerza y vigor lo mandado en las Reales órdenes de 16 de setiembre de 1853, 7 de igual mes de 1856, 9 de enero y 19 de febrero de este año, en lo relativo á las expediciones de colonos ó emigrados, que salgan de los puertos de la Península, islas adyacentes y de las Antillas españolas para las Repúblicas Hispano-Americanas ó para cualquiera otro punto de América y Asia.

2.º Que cuando las expediciones que se habiliten para Cuba y Puerto Rico tengan por objeto conducir colonos ó emigrados contratados por empresarios, habrá de solicitarse previamente el Real permiso de embarque al tenor de lo dispuesto en la regla 4.ª de la expresada Real orden de 16 de setiembre de 1853; pero no será necesario dicho requisito, y podrán los Gobernadores conceder estos permisos para las islas con arreglo á las prescripciones de las citadas Reales órdenes, cuando los pasajeros vayan de sobrecargo á bordo de buques mercantes sin contrato ni obligación que les sujete á prestar un servicio personal.

3.º Que los armadores ó dueños de las embarcaciones expedicionarias que salgan con destino á las Antillas españolas, ya conduzcan colonos y emigrados ó ya pasajeros de sobrecargo, queden también obligados á constituir fianza en metálico en los términos prevenidos por la Real orden de 7 de setiembre de 1856.

4.º Que cuiden los Gobernadores con el mayor celo de la rigurosa observancia de las mencionadas Reales órdenes en lo

que no se oponga á la presente resolución, y que en su consecuencia remitan á este Ministerio los documentos á que se refieren los artículos 2.º y 3.º de la Real orden de 7 de setiembre de 1856, sin distinción alguna, ya se trate de pasajeros que vayan de sobrecargo ó de colonos y emigrados.

Y 5.º Que cuiden asimismo los Gobernadores de vigilar muy especialmente por sí y por medio de sus delegados estas expediciones, á fin de que no se cometan abusos y se impidan las emigraciones clandestinas de que tiene conocimiento este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de diciembre de 1857. —Bermudez de Castro.—Sr. Gobernador de la provincia de...

CIRCULAR NÚM. 482.

Disponiendo la nueva elección de Habilitados del Clero para el trienio de 1860 á 1862 inclusive.

Sección de Hacienda.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se me dice en 8 del actual lo que sigue:

Con fecha de hoy se comunica por este Ministerio á los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos la Real orden siguiente:

«Llegado el caso previsto en la Real orden circular de 26 de noviembre último para llevar á efecto la elección de Habilitados que representen al Clero en las provincias durante el trienio de 1860 á 1862 inclusive, ha tenido á bien mandar la Reina (Q. D. G.) se sirva V. I. adoptar desde luego las disposiciones oportunas para que con sujeción á las reglas establecidas en la de 20 de octubre de 1855, se reúnan el día que V. I. determine los diferentes partícipes del presupuesto eclesiástico de esa Diócesis en los pueblos cabeza del arciprestazgo á que pertenezcan, para que, bajo la presidencia del arcipreste respectivo, ó del que ejerza sus funciones en el caso de ausencia, enfermedad ó vacante, elijan el comisionado ó comisionados que hayan de representarles en la capital de provincia para la elección de Habilitado, que ha de efectuarse dentro del mes de setiembre próximo; debiendo para este objeto ponerse V. I. anticipadamente de acuerdo con los Gobernadores civiles de las en que se halle enclavada esa Diócesis, á fin de que se fije el día, hora y local en que haya de tener lugar el acto, de cuyo resultado se servirá V. I. dar conocimiento á este Ministerio, expresando el nombre del electo.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo participo á V. I. para su inteligencia y fines consiguientes.»

De la propia Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo traslado á V. S. para los propios fines, recomendándole que una vez realizada la elección de Habilitado, se sirva dar conocimiento del resultado á este Ministerio.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para los efectos correspondien-

tes. Orense 17 de agosto de 1859. —El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Real orden de 20 de octubre de 1855, á que alude la que precede.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Dirección general de Contabilidad.—Circular.—Deseando S. M. que la elección de Habilitados á que se refiere el art. 2.º del Real decreto de 8 del corriente, se verifique en las Diócesis con todas las formalidades que puedan contribuir á la seguridad del acierto, al paso que con la menor molestia y perjuicios posibles de los partícipes interesados; se ha servido disponer que para llevarla á efecto se observen las reglas siguientes:

1.ª Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos dispondrán sin la menor demora que todos los individuos del Clero parroquial y benefical, mayordomos de fabricas de las iglesias de los pueblos de cada arciprestazgo, y comunidades religiosas existentes en los mismos pueblos, sus capellanes y sacristanes, elijan por sí ó por medio de encargado debidamente autorizado, que en el de la residencia del arcipreste y bajo de su presidencia, nombren un comisionado que les represente en la capital de la provincia á que aquellos correspondan, á fin de que concurra á la elección de Habilitado.

2.ª Los arciprestes darán conocimiento á los respectivos Prelados de los comisionados que los diferentes partícipes hubieren elegido para el efecto.

3.ª En el caso de que los pueblos dependientes de un mismo arciprestazgo pertenezcan á dos ó mas provincias, se elegirá un comisionado por todos los partícipes que correspondan á cada una de ellas, á fin de que pueda concurrir á la capital respectiva, con el objeto indicado en la regla 1.ª

4.ª Los Diocesanos fijarán con la anticipación debida, y de acuerdo con los Gobernadores de provincia, el día en que los comisionados hayan de reunirse en la capital, para el acto de la elección de Habilitado, y la hora y sitio en que ha de tener lugar.

5.ª Concurrirán á este acto, con los comisionados de los arciprestazgos, los que también habrán de elegir en su representación los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, Cabildos catedrales, colegiales y mayordomos, ó encargados de las fabricas de sus iglesias y del Seminario conciliar.

6.ª Presidirán el acto de la elección un delegado del Prelado y otro del Gobernador de la provincia, haciendo de secretario el cura párroco mas moderno de las parroquias enclavadas en la capital misma.

7.ª Los comisionados para la elección acreditarán su cometido con una certificación que habrá de expedir el presidente de la corporación eclesiástica y el arcipreste ante quien hubiere tenido lugar su nombramiento.

8.ª La elección se verificará por votación secreta y nominal.

9.ª Concluida que sea la votación, se hará el escrutinio y se declarará por los delegados referidos la elección de Habilitado en favor de la persona que haya reunido mayoría de votos. De este resultado se levantará acta, que autorizarán los mismos delegados y el secretario. El acta original se depositará en la Secretaría de cámara del Diocesano, después que los delegados hayan facilitado

copia autorizada al Gobernador de la provincia y al administrador ecónomo de la Diócesis.

10.ª La duración del cargo de Habilitado será de tres años, á contar desde 1.º de enero próximo, pudiendo ser reelegidos en su día los que ahora se nombren. La retribución que por todos gastos deba abonarse á los partícipes respectivos, no excederá en ningún caso de tres cuantillos de real por ciento, respecto de la cantidad que perciban de la Tesorería de provincia.

Y 11.ª Aunque el nombramiento de Habilitado de los partícipes del presupuesto eclesiástico, es de cuenta y riesgo de los mismos, según lo prevenido en el art. 2.º del Real decreto de 8 del actual, es la voluntad de S. M. procuren que la elección recaiga en persona que, á la aptitud necesaria para este cometido, reúna las circunstancias de arraigo y moralidad que garantizan en todo evento los intereses que ponen á su cuidado las diversas clases á quienes representa.—De Real orden lo comunico á V. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 27 de octubre de 1855.—Fuente Andrés.—Señor....

CIRCULAR NÚM. 483.

Determinando la autoridad que debe otorgar las escrituras de ventas de bienes adjudicados á la Hacienda por débitos á favor de la misma.

Sección de Hacienda.

La Dirección general de Contribuciones me dice en 6 del actual lo que sigue:

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección general con fecha 26 de julio último la Real orden siguiente:

«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por la Administración de Hacienda pública de Canarias con el fin de que se declare por quién deben otorgarse las escrituras de venta de bienes en las ejecuciones que se siguen por los comisionados de apremio para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda.

Y considerando, que según el artículo 77 del Real decreto de 25 de mayo de 1845, en los pueblos que no sean capitales de provincia ó cabeza de partido administrativo corresponde al Alcalde ó persona que le represente presidir el acto de la subasta para la venta de los bienes muebles; que en el art. 85 del mismo Real decreto se estableció que los trámites para la venta de los bienes inmuebles sean los mismos que para la de los muebles, previniéndose además que se dé á estos remates toda la solemnidad que las leyes señalan para los de su clase, y que por el art. 989 de la ley de enjuiciamiento civil se previene también para los casos comunes, que si el deudor no se presentase al otorgamiento de las escrituras, lo haga de oficio el Juez de la subasta;

Conformándose S. M. con el dictamen de las Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, con lo informado por la

Asesoría general de este Ministerio, y con lo propuesto por V. E., se ha dignado resolver, que las escrituras de venta de bienes inmuebles por débitos a favor de la Hacienda, se otorguen por los que presidan el acto de subasta, ya sean los administradores en las capitales de provincia y cabeza de partido Administrativo, ya los Alcaldes en los demás pueblos donde no residan aquellos funcionarios.

Do Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Lo que traslado a V. S. para su inteligencia y cumplimiento.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para su publicidad y demás efectos. Orense 17 de agosto de 1859. — El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

CIRCULAR N.º 481.

Encargando la busca y captura de Domingo Granja, natural de Penouta.

El Sr. Juez de primera instancia de Viana del Bollo en comunicación de 6 del actual me dice lo siguiente.

He de merecer de V. S. se dignen dar las órdenes oportunas a los dependientes de su autoridad para la captura y remisión a este Juzgado de Domingo Granja, natural del pueblo de Penouta de este partido, cuyas señas al margen se expresan, contra quien estoy procediendo por delito de homicidio a Agustín Rodríguez y Rafael Conso y heridas al hijo de aquel, Romualdo, ejecutados en la noche del día 5 del corriente, y cuyo sugeto ha desaparecido de su casa sin saberse de su paradero.

Y en su consecuencia, encargo muy particularmente a los Sres. Alcaldes, puestos de la Guardia civil y demás dependientes de mi autoridad procedan a averiguar el paradero del sugeto enunciado, y de ser habido lo pongan con toda seguridad a disposición de dicho Juzgado, dando cuenta de haberlo verificado. Orense agosto 17 de 1859. — El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Señas.

Estatura 5 pies próximamente, grueso de cuerpo, de 45 años próximamente de edad, cara larga, color trigueño, ojos garzos, pelo canoso mas de media cabeza adelante, nariz larga y afilada, viste calzon y chaqueta a estilo del país, algunas veces un chaqueton de paño pardo, y casi siempre lleva a la cabeza un pañuelo de algodón de color azul y rayas blancas, zapatos de feria y el chaleco de jerga negra.

CUARTA SECCION.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA.

Se publica la vacante del estanco de Beade, dependiente de la Administración de Ribadavia, vereda de

Alfonso, por fallecimiento de D. Laureano Rodríguez que le desempeñaba. En su consecuencia, los interesados que se crean aptos para su desempeño, pueden desde luego dirigir sus solicitudes al Gobierno de provincia, manifestando en ellas poder pagar al contado los efectos que se les entreguen para la venta, y de reunir las circunstancias prescritas en la Real orden de 5 de julio del año último, acompañando copias legalizadas de sus licencias absolutas, o documentos que acrediten servicios prestados al Estado, dentro del término de ocho días a contar desde la publicación de este anuncio. Orense 20 de agosto de 1859. — Joaquín M. Espiau.

QUINTA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA DE LUGO.

Obras públicas.

En esta provincia se halla vacante una de las plazas de Director de caminos vecinales, dotada con el sueldo anual de 6,000 rs. y 2,000 de gratificación, pagados todos de los fondos de la misma, y como sin embargo de haber transcurrido con exceso el término marcado para la presentación de solicitudes en el Boletín oficial de 8 de junio último y en la Gaceta de Madrid de 11 del propio mes, todavía no se ha presentado suficiente número de aspirantes para formar propuesta en terna, he dispuesto señalar, como lo verifico, el nuevo plazo de treinta días contados desde la fecha, para la admisión de las exposiciones que al efecto se presenten en la secretaría de este Gobierno, las cuales habrán de venir acompañadas del título correspondiente, y de los documentos que acrediten los servicios y antecedentes de los aspirantes. Lugo 8 de agosto de 1859. — Humana.

UNIVERSIDAD LITERARIA DE SANTIAGO.

Instrucción primaria.

Conforme a la Real orden de 10 de agosto del año último, ha de proyectarse por concurso las escuelas de primera enseñanza, vacantes en las provincias que a continuación se expresan:

PROVINCIA DE LUGO.

ELEMENTAL COMPLETA DE NIÑAS.

Ayuntamientos.	Escuelas vacantes.	Dotación.
Fonsagrada.	Fonsagrada.	2,000

PROVINCIA DE ORENSE.

ELEMENTALES COMPLETAS DE NIÑOS.

Carballada de Valdeorras.	Carballada.	2,500
Vega del Bollo.	La Vega.	2,500
Villamarín.	Villamarín.	2,500
Beatz.	Beatz.	2,500

Irijo.	Campos.	2,500
Cortegada.	Cortegada.	2,500
Merca.	Merca.	2,500
Baltar.	Baltar.	2,500
Blancos.	Aguis.	2,500
Calbos de Randín.	Calbos.	2,500
Moreiras.	Moreiras.	2,500
Porquera.	Porquera.	2,500
Rairiz de Veiga.	Rairiz.	2,500
Sandianes.	Sandianes.	2,500
Sarreans.	Sarreans.	2,500
Villar de Santos.	Villar.	2,500
Chandreja.	Chandreja.	2,500
Laroco.	Laroco.	2,500
Manzaneda.	Manzaneda.	2,500
Montederramo.	Montederramo.	2,500
Rio.	Rio.	2,500
Abián.	Barroso.	2,500
Castro del Val.	Castro del Val.	2,500
Gualdro.	Gironda.	2,500
Oimbra.	Oimbra.	2,500
Gudiña.	Gudiña.	2,500
Mezquita.	Mezquita.	2,500
Villarino de Conso.	Conso.	2,500
Bollo.	Hermitas.	2,200
Viana.	Pinza.	2,200

INCOMPLETAS DE NIÑOS.

Cea.	Viduedo.	1,200
Maside.	Amarante.	1,200
	Ourantes.	1,200
	Louredo.	1,200
Cortegada.	Valongo.	1,200
	Relojos.	1,200
Carballino.	Arco, S. Juan.	1,100
	Baños.	700
	Calbos.	500
	Corbelle.	800
	Nigueiroá.	700
Bande.	Ribero.	900
	Carpazás.	900
	Santa Comba.	500
	Garabelos.	360
	Cadonies.	500
	Guin.	300
	Brúes.	800
	Albarellos.	800
	Aslureses.	600
Boborás.	Feás.	600
	Gendive.	600
	Pazos.	600
	Caída.	500
Pizor.	Coiras.	500
	Berrido S. Baya.	800
Bola.	Podentes.	500
Orense.	Reza.	500
Nig. de Ramun.	Loira del Monte.	1,200
Villamarín.	Tamallancos.	500
	San Mauro.	500
Arnoya.	San Vicente.	500
	Barrio.	500
Puebla de Trives.	Navea.	500
Laroco.	Seadur.	1,100

PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

INCOMPLETAS DE NIÑOS.

Cambados.	Cortilón.	700
Cabiza.	Parada.	360
Laín.	Lodeiro.	300
Salvatierra.	Aljan y Cabreira.	360

Los aspirantes que reúnan las circunstancias prescritas en la citada Real orden, dirijan sus solicitudes documentadas al señor Gobernador presidente de la Junta de Instrucción pública de la respectiva provincia, dentro del término de un mes que principiará a contarse desde el día que inserte este anuncio el Boletín oficial de la misma.

Santiago 12 de agosto de 1859. — El Rector, Juan José Viñas.

Juzgado de primera instancia de Lugo.

Por el juzgado de primera instancia de Lugo se cita, llama y emplaza al presidiario Francisco Franco Balboa, fugado de la cárcel de Villafranca del Bierzo el día 27 de julio último, para que dentro de treinta días siguientes al de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial, se presente en la pública de esta capital a responder a los cargos que le resultan en causa que contra él y otros se instruye sobre calumnia; advirtiéndole que pasado dicho término sin verificarlo seguirá aquí la su causa, entendiéndose con los estrados de audiencia las diligencias que con él debieran entenderse y le parará el perjuicio que hubiese lugar. Lugo 9 de agosto de 1859. — Facundo Santos Cid.

Idem de Padron.

El Licenciado don Felipe Viñas, caballero de la Real y distinguida orden española de Carlos III, juez de primera instancia en la villa y partido de Padron, etc. — Llamo en el orden de derecho a José Yañez, hijo de otro y Josefa Herbon, natural de San Cristóbal de Ahumada en el partido de Noya, para que dentro del término de nueve días se presente en esta casa de audiencia, o cárcel pública, a sufrir trece días de prisión por sustitución y apremio de gastos del juicio en causa aquí formada por hurto, según así está acordado por S. E. los señores de la Audiencia territorial. Dado en Padron a 10 de agosto de 1859. — Felipe Viñas. — Por mandado de S. S. Angel Astray Fernández.

El Licenciado don Felipe Viñas, abogado de los tribunales del reino, caballero de la Real y distinguida orden española de Carlos III, juez de primera instancia en la villa y partido de Padron, etc. — Llamo en el orden de derecho a José Lago, oriundo de San Martín de Frume, partido de Noya y vecino de Santa María de Cruces, términos del de esta villa, para que se presente en esta casa de audiencia a prestar indagatoria en procedimiento que instruyó por lesiones inferidas a su suegro Antonio Abán y a usar de los recursos que le convengan, si por riere se le oír y en otro caso de parará el perjuicio que haya lugar. Dado en la villa del Padron a 12 de agosto de 1859. — Felipe Viñas. — Por mandado de S. S. Angel Astray Fernández.

Idem de Villanueva de la Serena.

El Licenciado don José María García Navarro, juez de primera instancia de esta ciudad y su partido. — Por el presente se llama y emplaza a Andres García, vecino de Villavieja, partido judicial de Viana del Bollo, provincia de Orense, para que se presente en este juzgado y término de treinta días, a nombrar procurador y abogado que lo defendan en la Real Audiencia de Cáceres, en la causa en que se halla complicado con otros por heridas a Domingo Carracedo y varios compañeros; apercibido de que pasado dicho término sin verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Villanueva de la Serena y agosto 11 de 1859. — José María García Navarro. — El escribano originario, Francisco Valdés.